

**Cambio de billetes del Banco de España / informe  
que acerca de la cuestion emiten los abogados  
Manuel Cortina... (et al.)**

s.l. : s.n. (Madrid : Rivadeneyra), 1866

Signatura: D-05091

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente*



**CAMBIO DE BILLETES**  
DEL  
**BANCO DE ESPAÑA.**

---

**INFORME**

*que acerca de esta cuestión*

**EMITEN LOS ABOGADOS**

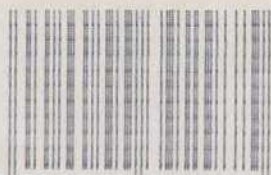
EXCMO. SR. D. MANUEL CORTINA.  
SR. D. FRANCISCO CUTANDA. EXCMO. SR. D. JUAN GONZALEZ ACEBEDO.  
ILMO. SR. D. LUIS DIAZ PEREZ.  
SR. D. JOSÉ GONZALEZ SERRANO. SR. D. RAMON PASARON Y LASTRA.  
EXCMO. SR. D. CIRILO ALVAREZ. SR. D. NICOLAS MARÍA RIVERO.  
EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA FERNANDEZ DE LA HOZ.  
ILMO. SR. D. LAUREANO FIGUEROLA.  
EXCMO. SR. D. PEDRO GOMEZ DE LA SERNA.  
SR. D. CAMILO MUÑIZ VEGA.  
SR. D. ANTONIO DEL RIVERO CIDRAQUE.  
SR. D. GREGORIO MIOTA.

---

MADRID,  
IMPRESA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA,  
calle del Duque de Osuna, número 3.

1866

LIBRERIA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA



1 000000 392975

D 5091





**CAMBIO DE BILLETES**  
**DEL**  
**BANCO DE ESPAÑA.**

---



**INFORME**

que acerca de esta cuestión

**EMITEN LOS ABOGADOS**

EXCMO. SR. D. MANUEL CORTINA.

SR. D. FRANCISCO CUTANDA. EXCMO. SR. D. JUAN GONZALEZ ACEBEDO.

ILMO. SR. D. LUIS DIAZ PEREZ.

SR. D. JOSÉ GONZALEZ SERRANO. SR. D. RAMON PASARON Y LASTRA.

EXCMO. SR. D. CIRILO ALVAREZ. SR. D. NICOLAS MARÍA RIVERO.

EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA FERNANDEZ DE LA HOZ.

ILMO. SR. D. LAUREANO FIGUEROLA.

EXCMO. SR. D. PEDRO GOMEZ DE LA SERNA.

SR. D. CAMILO MUÑIZ VEGA.

SR. D. ANTONIO DEL RIVERO CIDRAQUE.

SR. D. GREGORIO MIOTA.

---

**MADRID,**

IMPRESA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA,  
calle del Duque de Osuna, núm. 3.

1866

CAMBIO DE BILLETES

BANCO DE ESPAÑA

INTORNO

DE LOS BILLETES

EMITIDOS LOS ABOGADOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891, se ha acordado en el Consejo de Ministros, y en el Consejo de Regencia, lo siguiente:

1.º Los billetes emitidos por los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891, serán válidos para el pago de los impuestos de los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891.

2.º Los billetes emitidos por los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891, serán válidos para el pago de los impuestos de los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891.

3.º Los billetes emitidos por los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891, serán válidos para el pago de los impuestos de los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891.

4.º Los billetes emitidos por los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891, serán válidos para el pago de los impuestos de los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891.

5.º Los billetes emitidos por los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891, serán válidos para el pago de los impuestos de los Abogados, en virtud de la Ley de 1.º de Mayo de 1890, y en el artículo 1.º de la Ley de 1.º de Mayo de 1891.

REPUBLICA

GOBIERNO DE ESPAÑA

1891



---

## DICTÁMEN.

---

CONSIDERANDO el Consejo del Banco de España la gravedad y trascendencia del fallo en que la Real Audiencia de Madrid ha declarado haber lugar á despachar la ejecucion solicitada por el marqués de Santa Marta, contra el referido Banco, por la cantidad de doscientos mil reales vellon é intereses á razon del seis por ciento, desde que por falta de pago en el acto fueron protestados los billetes que representaban aquella suma, y teniendo ademas en cuenta la índole especial y delicada de las cuestiones que en este asunto se versan, creyó conveniente, oir la opinion de los que suscriben, ya acerca de la justicia y solidez de los fundamentos en que se apoya la referida providencia, ya acerca de los medios legales que el establecimiento demandado puede y debe emplear para combatirla, así en la via judicial como en la contencioso administrativa, ya finalmente acerca de las cuestiones económicas y legales que se suscitan en la demanda, y que en el fallo

de la Audiencia se resuelven en sentido favorable al objeto del demandante.

Para dar la debida contestacion á cada uno de los diferentes puntos que la consulta contiene, no sólo han procurado los que suscriben examinarlos y discutirlos prolija y concienzudamente, con la separacion conveniente, sino que se han cuidado de conocer la situacion en que el Banco se encuentra, porque así lo requiere alguna de las cuestiones cuya resolucion promueve la consulta.

Natural es, en verdad, que el Consejo del Banco desconfie de su propio acierto, al ver por primera vez interpuesta ante los tribunales, y estimada por éstos, una demanda ejecutiva que ni aún en situaciones por demas apuradas y angustiosas para aquel establecimiento se le ocurrió á nadie interponer.

Cuando todavía están recientes los esfuerzos hechos por el Banco de España para disminuir los funestos efectos de la profunda desnivelacion que se advierte en la circulacion monetaria del país, procurando con diligente solicitud y con perseverante afan, aún á expensas de considerables quebrantos para la adquisicion de pastas, que sus cajas no dejarán de facilitar el numerario que las empresas, las sociedades de crédito y los bancos locales de provincias libran á cargo de la plaza de Madrid, con el objeto de acudir á las obras públicas, cuyo desarrollo ha sido acometido en España con asombrosa rapidez; cuando, á consecuencia de esa considerable creacion de valores á cargo de esta misma plaza, en el espacio de ocho meses escasos han salido de las caías del Banco mas de 400 millones de



reales; cuando, por haber alzado toda restriccion en el cambio de billetes, excedió de 99 millones la cantidad invertida en dicho cambio en solos veinte y cuatro dias, cuando en sus cajas, en fin, tiene hoy mismo mucha mayor suma en metálico que la que por la ley debe existir en ellas como fondo de reserva, se concibe el deseo del Consejo de buscar una solucion clara y precisa acerca de cada una de las cuestiones que expresa la consulta.

Comprenden los que suscriben que todas ellas son graves, y algunas de resolucion difícil, para que puedan tener la presuncion de haber acertado á dársela; pero si saben que las han examinado y discutido con recto juicio, con desapasionado criterio y con la elevacion de propósito y de miras que exige de suyo un asunto que puede afectar hondamente al crédito del país.

Desea en primer lugar el Banco de España oir nuestra opinion acerca de la justicia y solidez de los fundamentos en que se apoya la sentencia pronunciada por la sala 1.<sup>a</sup> de la Audiencia del territorio; y para emitirla acertadamente, preciso es analizar lo que en los considerandos de dicha sentencia se encuentra consignado. Despues de expresar en ellos que el Banco de España es una compañía anónima mercantil, que goza de determinados privilegios, entre los cuales es uno el que consiste en la facultad de emitir billetes pagaderos al portador, á la vista y en su caja de Madrid, añade que estos billetes, así emitidos, *son, y no pueden ménos de ser, letras de cambio, si bien privilegiadas*, por ser al portador y pagaderas

en el mismo pueblo de su fecha, *contra lo prescrito* en el núm. 3.º, art. 426 y 429 del Código.

Supone esto que, además de las únicas letras de cambio que conoce el Código mercantil, hay otras que el Tribunal califica de *privilegiadas*, por ser contrarias á lo que el mismo código dispone. Ni en el artículo 5.º de la Real cédula de 12 de Julio de 1829, ni en el art. 6.º de los Estatutos para el Banco de Isabel II, ni en el art. 2.º de la ley de 4 de Mayo de 1844, ni en el 7.º de la de 15 de Diciembre de 1851, ni en el 9.º de la ley de 28 de Enero de 1856, ni en el artículo 13 de los Estatutos aprobados en Real decreto de 6 de Mayo de 1856, se encuentra declaracion alguna de que los billetes de Banco sean letras de cambio privilegiadas, contra lo que dispone el Código de Comercio, en sus artículos 426 y 429.

Hasta ahora la ciencia no ha calificado de letras de cambio, ni en España, ni fuera de España, á los billetes de los bancos de emision, por más que los haya considerado como papel fiduciario, y aún dándoseles por algunos la denominacion de moneda fiduciaria, viniendo de este modo á resultar que es de cierto en esta sentencia, donde por primera vez se consigna en Europa que los billetes de los bancos de emision son letras de cambio.

Hasta qué punto se halla esto en contradiccion con lo que la ciencia enseña y la ley prescribe, lo demuestra el simple exámen de lo que legalmente es la letra de cambio.

Es la letra un documento privado, extendido con arreglo á las formas legales, en que una persona



manda á otra, domiciliada en pueblo diferente, que pague á un tercero, en la época señalada, cierta cantidad en dinero metálico, en cambio de otra que ha recibido ó cargado en cuenta. De este modo resulta que las condiciones propias de toda letra de cambio son: que ha de pagarse en distinto lugar, que ha de ser efectiva á la orden del acreedor, y transmisible por simple endoso, viniendo así á figurar, por lo general, en la letra de cambio la intervencion de tres personas, que son: el librador, el tomador y el aceptante. Cabalmente constituye la letra de cambio, en las operaciones mercantiles, un título en virtud del cual se ponen en comunicacion dos plazas de comercio por medio del giro. Esto, que la ciencia enseña, se encuentra consignado en los artículos 426 y 429 del Código de Comercio. En el 1.º de ellos se establece que para que las letras de cambio surtan en juicio los efectos que el derecho mercantil las atribuye, han de contener la designacion del lugar, día, mes y año, en que se libra la letra de cambio, la época en que debe ser pagada, el *nombre y apellido de la persona á cuya orden se manda hacer el pago*; la cantidad que el librador manda pagar, el valor de la letra, el nombre y apellido de quien se recibe ese mismo valor, ó á cuya cuenta se carga; el nombre y domicilio de la persona á cuyo cargo se libra, y la firma del librador. En el 2.º de dichos artículos se prohíbe expresamente girar letras de cambio *pagaderas en el mismo pueblo de su fecha*, y se ordena que las que se giran en esa forma se entenderán simples pagarés de parte del librador en favor



del tomador. De este modo ha venido la ley á establecer preceptivamente lo que la ciencia enseña, sancionando á la vez la diferencia esencial que existe entre los pagarés á la orden y la letra de cambio, y cuya diferencia consiste cabalmente en que el pagaré contiene una obligacion suscrita por una persona en favor de otra, por una cantidad determinada, *pagadera en la misma plaza* en que aparece firmado el pagaré. En la sentencia se reconoce que en el billete de Banco falta, cuando ménos, el requisito esencial que el Código de Comercio exige en las letras de cambio, cuando manda que se consigne en ellas *el nombre y apellido de la persona á cuya orden haya de hacerse el pago*; y tambien confiesa el Tribunal que su fallo contraviene á la disposicion del mismo Código, que prohíbe girar letras de cambio pagaderas en el mismo pueblo de su expedicion; pero, en vez de ajustarse á la letra y espíritu de la ley, que no quiere que esto suceda nunca, y que para el caso en que indebidamente acontezca, manda que semejantes letras se consideren como simples pagarés, declara el Tribunal que los billetes de Banco son letras de cambio privilegiadas, contra lo que el mismo Código dispone. No es, por lo tanto, procedente una declaracion, que por reconocimiento expreso del mismo Tribunal que la pronunció, está en contradiccion con lo que el Código de Comercio dispone, de acuerdo con los buenos principios, y que, por otra parte, no tiene apoyo alguno expreso en las disposiciones especiales que autorizan la creacion de los billetes de Banco, porque no hay una sola de todas ellas, no ya que declare que son, y no

pueden ménos de ser, letras de cambio, sino que las equipare con ellas.

Por consiguiente, no puede tener aplicacion á los billetes del Banco de España lo que el Código de Comercio y la ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas mercantiles establecen, respecto de la fuerza ejecutiva que atribuyen determinadamente á las letras de cambio.

Es otro de los fundamentos del fallo que examinamos, la consideracion de que, con arreglo al artículo 23 de la ley de 28 de Enero de 1856, el Banco está constituido en depositario de la cantidad que los billetes representan, con todas las responsabilidades que las demas leyes imponen á los depositarios voluntarios que no entregan el depósito cuando son requeridos para ello por persona competente, y al portador, como su acreedor. Ciertamente como es que, para el caso de disolucion ó liquidacion de los bancos de emision, declara la ley, en el citado artículo, que los tenedores de billetes merecen en todo caso el concepto de acreedores voluntarios, no quiere esto decir que el título que acredita ese depósito tenga fuerza ejecutiva por esa sola consideracion. Esta fuerza se la da la ley privilegiadamente por una disposicion expresa suya á los títulos que determinadamente designa, y no porque exista entre dos personas ó entre un particular y un banco un contrato de depósito, produce ese contrato accion ejecutiva, si la obligacion no está consignada en un título que por disposicion expresa de la ley traiga aparejada ejecucion.

Los billetes atribuyen á su tenedor el concepto de



acreedor por depósitos voluntarios; pero por esta sola razon, y nada más que por esta razon, no puede sostenerse que el billete sea un título ejecutivo, porque en ese caso lo será tambien, sin más garantía, cualquiera otro documento en que se consigne un contrato de depósito. La razon, pues, de que el billete de Banco representa un depósito, no es bastante para atribuirle fuerza ejecutiva, porque la ley no se la da á todos los documentos, de cualquier clase que sean, en que se consigna la existencia de un depósito.

Agrega el Tribunal á estas consideraciones, otras dos, de las cuales es la primera, que al conceder al Banco el privilegio de emitir billetes, ha sido con la condicion de hacer su pago al portador, á la vista y en metálico; todo lo cual quedaria desvirtuado si se negára la accion ejecutiva al tenedor del billete; y es la segunda, que por ministerio de la ley, existe un contrato entre el Banco y el portador, desde el momento en que aquel hace la emision y éste toma como metálico el billete, mucho más eficaz, á juicio del Tribunal, que la escritura pública ó el vale reconocido, porque es la misma ley la que crea las obligaciones y derechos respectivos, y por eso, en este sentido, el billete es un documento que tiene aparejada ejecucion con su sola presentacion y el protesto que acredita no haber sido pagado.

No es, en verdad, potestativo en los Tribunales atribuir fuerza ejecutiva á documentos que no la tengan declarada por disposicion expresa de la ley. En esta parte no puede ni debe perderse de vista lo que

se halla establecido en el art. 305 de la ley de enjuiciamiento mercantil.

En él se lee textualmente «que el procedimiento »ejecutivo no tiene lugar sino en virtud de un título »que, *por disposicion expresa de la ley*, traiga aparejada ejecucion.» La ley, al hablar de este modo, no permite que pueda darse fuerza ejecutiva á documento que no la tenga, por disposicion *expresa* suya. Es en vano recurrir á razones de analogia, ni á condiciones de mayor ó menor semejanza en uno y otro título, si en la disposicion *expresa* de la ley no se encuentra consignada la fuerza ejecutiva. Cabalmente porque la sala que ha pronunciado la sentencia sabia esto, y porque ademas no ignoraba que la ley de enjuiciamiento mercantil es posterior á la creacion del Banco de San Fernando, no encontrando que entre los documentos á que el art. 306 de aquella ley da fuerza ejecutiva, se la conceda á los billetes de Banco, los ha declarado dicha sala letras de cambio, porque éstas, con arreglo á los artículos 543 y 544, acompañadas del protesto, producen accion ejecutiva contra el aceptante que no pone tacha de falsedad al tiempo de hacer el protesto por falta de pago; pero la verdad es, segun queda ya demostrado, que los billetes de Banco no son letras de cambio.

En ellos lo que se lee es, que *el Banco de España pagará al portador en efectivo la cantidad* que expresa el billete. Es, por consiguiente, atendidos los términos de su redaccion, un pagaré al portador, sin designacion de persona; pero la legal existencia de tal pagaré está sancionada por las leyes especiales que



autorizan la emision de los billetes, pues en otro caso tendria aplicacion á ellos la disposicion del art. 571 del Código de Comercio, que declara que los pagarés en favor del portador, sin expresion de persona determinada, no producen obligacion civil ni accion en juicio. Los billetes de Banco tienen más significacion, tienen mayor importancia todavía que la que les atribuye la sentencia. Son pagarés al portador y á la vista, que el Banco entrega en representacion del dinero que ha recibido; son un signo representativo de la moneda recibida, hasta el punto de ser tanto más estimables, cuanto que se hace más fácil su circulacion que la del oro y la de la plata. Acrece el grado de su estimacion en el comercio por la circunstancia de ser exigibles ó reembolsables á la vista, y porque el tenedor de billetes hace uso de su capital con facilidad suma y con entera libertad, sin que el valor de tales documentos se funde en la materialidad intrínseca suya, sino en la facilidad de su instantánea conversion en moneda corriente.

De ahí el que no sólo hayan sido considerados los billetes como un papel fiduciario, sino hasta como una moneda fiduciaria; pero la verdad es, á pesar de todo esto, que ni la ley de enjuiciamiento mercantil, ni la ley de enjuiciamiento civil, supletoria de aquella en lo que en ella no está dispuesto, han mandado *expresamente* que el billete, *por sí solo y sin otra garantía de su legitimidad*, traiga aparejada ejecucion, concediéndole lo que no otorga ni aún á las escrituras públicas, respecto de las cuales exige, para darlas fuerza ejecutiva, que sea la original, ó si son copias, que



sean sacadas en virtud de decreto judicial y con citacion del deudor á quien han de perjudicar.

No quiere decir esto que los que suscriben nieguen fuerza ejecutiva al billete de Banco, siempre que se le ponga en condiciones, por medio de las oportunas diligencias, para que pueda tener fuerza ejecutiva, con el art. 306 de la ley de enjuiciamiento mercantil; lo que afirman es que por la sola presentacion de un billete de Banco, con un protesto que únicamente acredita la falta de pago, no puede despacharse mandamiento de ejecucion contra el Banco de España, porque eso no puede hacerse, ni á pretexto de que los billetes son letras de cambio, porque la ley no autoriza semejante declaracion, ántes la contraria; ni á pretexto de que son el signo representativo de un depósito, porque no basta que un documento le represente, para que traiga aparejada ejecucion; ni porque represente un pago que haya de hacerse al portador, á la vista y en metálico, supuesto que otros documentos mercantiles que reunen esas mismas condiciones, como son las letras y los pagarés á la orden, no tienen fuerza ejecutiva por la sola circunstancia de ser al portador; ni por haber de pagarse á la vista ó á presentacion, ni por haberse de verificar el pago en metálico, si no concurren en ellos todas las demas garantías de legitimidad que la ley exige para que la ejecucion pueda ser despachada; ni á pretexto, en fin, de que la ley es la que, al autorizar la emision de los billetes, los ha hecho pagaderos al portador, á la vista y en metálico; porque la verdad es que la ley no ha debido querer que tengan fuerza ejecutiva, sin otro

requisito y sin más garantía que la sola presentación del billete á los Tribunales, cuando al disponer que no tenga lugar el procedimiento ejecutivo sino en virtud de un título que, *por disposicion expresa de la misma ley*, traiga aparejada ejecucion; y al designar *expresamente* en seguida los títulos que tienen fuerza ejecutiva, no comprendió entre ellos los billetes de Banco, cuya emision habia tenido ya efecto.

Resulta, por lo tanto, que el fallo que la sentencia contiene, no puede justificarse por los fundamentos que en su apoyo ha consignado el Tribunal en los considerandos, ni tampoco puede considerarse procedente por otras razones legales, supuesto que declara haber lugar á despachar la ejecucion por la sola presentación de unos billetes con el protesto, que únicamente acredita su falta de pago.

Pero hay otra consideracion de altísima importancia, que pone de relieve esa misma improcedencia. En el fallo se encuentra consignado que, denegada la ejecucion por el Tribunal de Comercio, y admitida en ambos efectos al marqués de Santa Marta la apelacion que interpuso, le fueron entregados los cincuenta billetes de Banco que habia presentado, como títulos en virtud de los cuales pidió la ejecucion, y que sin ellos fueron remitidos los autos á la Audiencia; viniendo así á resultar que la sala que ha pronunciado la sentencia no ha tenido á la vista los títulos en virtud de los cuales se pedia que los Tribunales mandáran despachar la ejecucion.

Lo mismo la antigua legislacion del reino, que la ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de



comercio, en su art. 314, que la de enjuiciamiento civil, en su art. 346, están contestes en imponer á los jueces la obligacion inexcusable de ver y examinar por sí mismos los títulos en virtud de los cuales se les pide que despachen mandamiento de ejecucion; y claro es que la Audiencia ha tenido que prescindir del cumplimiento de ese deber, supuesto que no ha visto, ni podido ver, ni examinado por sí, los billetes que constituian el título que el demandante presentaba para que se despachase la ejecucion. Esto ha dado lugar, por consiguiente, á que la sala haya ejercido sus funciones fuera de los límites marcados á las atribuciones que la ley fundamental del Estado confiere al órden judicial, porque, más que pronunciar su juicio sobre una cuestion concreta, y que versaba únicamente acerca de si los cincuenta billetes que el marqués de Santa Marta habia presentado, traian ó no aparejada ejecucion, ha resuelto abstractamente y por punto general que los billetes del Banco tienen fuerza ejecutiva, cual si en sus atribuciones estuviese dictar una regla de jurisprudencia ó hacer una declaracion general, porque esto, y no otra cosa, es lo que ha hecho en realidad, en razon á que no podia referirse á los billetes que aquel presentó, toda vez que no los tenía á la vista, y á ninguno determinadamente podia aludir al declarar que los billetes traen aparejada ejecucion.

No es posible reconocer en las audiencias territoriales atribuciones que son exclusivamente propias del poder legislativo, porque sólo al poder legislativo es dado declarar por regla general que los billetes de

Banco traen aparejada ejecucion, sin otra preparacion alguna. Los fallos de los tribunales de justicia sólo se refieren á casos concretos, lo cual dejará de suceder desde el momento en que se reconozca la posibilidad de que, desentendiéndose del documento que motiva una reclamacion determinada, se atribuyan facultades para resolver las cuestiones, cual si su fallo hubiese de tener aplicacion á todos los documentos de igual clase.

Es de tal modo improcedente esto, que hasta puede dar por resultado la inconcebible injusticia de que, habiendo sido devueltos, bajo recibo, al Marqués de Santa Marta los billetes que presentó, los haya realizado, y si no se ha adoptado por la escribanía la precaucion de consignar en el recibo de los billetes su numeracion respectiva, presente ahora otros, que sean los que sirvan para despachar la ejecucion, y para que se le abonen los réditos, porque así lo manda la Audiencia territorial, desde que el Marqués lo presentó para el protesto, suponiendo que ha estado privado de la cantidad que representan, cuando en realidad la haya tenido en su poder.

Cabalmente porque los que suscriben reconocen que si la ejecucion procediera del modo que el Tribunal ha mandado despacharla, la Real orden de 6 de Mayo no podria ser obstáculo que lo impidiese, porque las Reales órdenes no pueden derogar ni modificar lo que las leyes tienen establecido, en lo cual entienden que es fundado el considerando de la sentencia, así tambien, en su sentir, no pueden reconocerse á la administracion de justicia facultades para de-



clarar por regla general, en un juicio, la fuerza y eficacia que deba atribuirse á determinados documentos. Ni áun como regla de jurisprudencia es permitido eso á las audiencias territoriales, porque fijarla con sujecion á la ley es de más alta autoridad del orden judicial.

Así, pues, los que suscriben, entienden respecto del primer punto consultado, que no son procedentes ni sólidos los fundamentos de la sentencia, ni el fallo en ella pronunciado.

Acerca de los medios legales que el Banco puede y debe emplear para combatir la demanda, así en la via judicial como en la contencioso-administrativa, es lo que en segundo lugar consulta el Banco.

Ante todas cosas, y como punto de partida, debe quedar consignado que, devueltos los autos al Tribunal de Comercio, no puede ménos de despachar la ejecucion solicitada por el Marqués de Santa Marta, en imprescindible cumplimiento de la tantas veces citada sentencia. Ella ha marcado ya la naturaleza del juicio y señalado con toda precision que há lugar á la via ejecutiva, puesto que revocando el auto del inferior, declara haber lugar á despachar la ejecucion. Cualquiera que sea el juicio que el inferior forme acerca de la justicia, acierto y procedencia de este fallo, es evidente que, constituido hoy en simple ejecutor del mismo, no le es dado contravenirle ni dejar de prestarle cumplimiento sin incurrir en graves responsabilidades. Así lo exigen el respeto jérárquico y el que se debe á la santidad de la cosa juzgada, en que se interesan el orden público, no



ménos que el privado, para que los derechos en litigio no queden en incierto perpétua ó indefinidamente.

Despachada, pues, la ejecucion, como no puede ménos de serlo, la defensa del Banco, como la de todo ejecutado, sólo puede consistir: primero, en pedir que se declare nula la ejecucion despachada, y que, por consiguiente, no ha lugar á sentenciar los autos de remate; segundo, en alegar y probar alguna de las diez excepciones que taxativamente enumera el art. 327 de la ley de enjuiciamiento mercantil; y tercero, en alegar la incompetencia de jurisdiccion, con arreglo al mismo artículo. Debemos examinar ahora las ventajas é inconvenientes de cada uno de estos medios de defensa, y cuál es, á nuestro juicio, el que ofrece mayores probabilidades de buen éxito.

1.º *Nulidad de la ejecucion.*—Las observaciones que quedan hechas al responder á la primera pregunta, indican con suficiente claridad que éste es el medio más vigoroso y decisivo de defensa. Hemos dicho que no creemos arreglada á derecho la parte dispositiva de la sentencia, puesto que cualquiera que sea el juicio que se forme acerca de la naturaleza de los billetes de Banco y de su mayor ó menor analogía con las libranzas y pagarés á la orden, no pueden tener el carácter de ejecutivos, con arreglo á la severidad de la ley de procedimientos, mientras la accion no se prepare convenientemente. Sin esta preparacion, prévia é indispensable, y lo que es más, sin

tener á la vista el título en cuya virtud se pedia la ejecucion, se ha mandado despacharla por el capital que representaban, y sus intereses, que, segun ya queda indicado, es posible haya percibido el portador de los billetes, toda vez que se le mandaron devolver. A juicio de todos los que suscriben, la nulidad de la ejecucion es tan patente é indiscutible, como lo sería la de otra cualquiera que se despachase en virtud de una letra de cambio ó de un pagaré sin que previamente se hubiesen practicado las diligencias que para cada uno de estos documentos exige la ley mercantil, no por mera solemnidad de forma, sino de esencia, y como garantía eficaz de la legalidad del procedimiento, que por lo mismo que empieza con el embargo de bienes del presunto deudor, exige que ántes de proceder aparezca justificada la legitimidad del título. Y no se diga que en el caso que da lugar á esta consulta esa legitimidad ha quedado establecida desde el momento en que la Audiencia de esta córte ha declarado que procede la via ejecutiva en virtud de la simple presentacion de los billetes que en la primera instancia hizo el Marqués de Santa Marta, y que el Tribunal de Comercio de esta córte no podrá, por consiguiente, declarar la nulidad de la ejecucion despachada en virtud de aquel superior precepto, sin faltar al respeto jerárquico y á la obediencia que se debe á las providencias de la superioridad; siendo, por lo tanto, no sólo inútil, sino hasta ridícula, una disension, que no puede dar resultados favorables al que la promueve. Tal observacion, si se hiciese, sería puramente sutil y sofística. El Tribunal de Comercio



cumplirá con su deber despachando la ejecucion, porque esto es lo que se le ordena en la sentencia de que es cumplidor; pero no por esto puede, ni debe, abdicar la omnímota facultad que le corresponde para juzgar definitivamente, con arreglo á lo alegado y probado, sin sujetarse á otro criterio que al de su conciencia jurídica. Si por las observaciones que haga la defensa del Banco se persuade de que no procede pronunciar sentencia de remate, por adolecer el procedimiento de un vicio capital é insubsanable, así, sin género alguno de duda, lo declarará, en ejercicio del derecho, ó por mejor decir, del deber, que tiene de fallar con arreglo á la ley y segun las inspiraciones de su razon judicial. Pero áun suponiendo que por su exagerado é injustificable respeto á lo decidido por la Audiencia, con la cual ya habrá cumplido despachando la ejecucion, creyese que estaba fuera de sus atribuciones declarar la nulidad de la ejecucion, la cuestion se sujetaria nuevamente al criterio de aquel Tribunal superior, en virtud de la alzada que no podria ménos de interponer el Banco; y no es dudoso para los que conocen la rectitud, independencia y santo deseo de administrar recta justicia que asiste á los Tribunales de España, que pronunciaria la nulidad tan pronto como se convenciese de que existia, porque respecto á esta declaracion no hay ejecutoria, en el sentido legal de esta palabra. En el incidente que hasta ahora ha tenido lugar no ha sido oido el Banco; no ha podido exponer, por lo tanto, las razones que tiene para sostener que la ejecucion ha sido despachada sin el titulo necesario por la falta de prepara-

cion conveniente. ¿Cómo, pues, negarle el derecho á sostener en propia defensa esta doctrina? ¿Y cómo negar que podrá prevalecer si los Tribunales la encuentran arreglada á la ley escrita y á la razon, por más que ántes de oír su exposicion se haya adoptado una opinion contraria? Frecuentemente la severa imparcialidad de nuestros Tribunales suple y enmienda sus providencias; y para los que esto conocen por diaria experiencia, no puede ser dudoso que el triunfo de la razon y de la justicia ha de prevalecer siempre en ellos sobre mezquinas consideraciones del amor propio ofendido, que no caben en la altura de sus aspiraciones y sentimientos, tan nobles y elevados como su venerable institucion.

2.º *Excepciones que pueden oponerse en el juicio ejecutivo, con arreglo á las prescripciones de la ley mercantil.*—Desgraciadamente ninguna de las que taxativamente designa el art. 327 de la ley de enjuiciamiento parece que puede utilizarse en el presente caso, excepto la de falsedad, si los billetes presentados no fuesen legítimos. Pero las demas no pueden ser opuestas al portador de tales documentos, porque éstos no prescriben ni caducan, como que no tienen plazo señalado para el reintegro, que ha de hacerse á voluntad del tenedor, en quien, por consiguiente, la ley reconoce personalidad; ni respecto á ellos puede alegarse fuerza con grave daño inminente en la persona, ni pago, ni compensacion, ni, finalmente, ninguna de las solas excepciones que tienen lugar en el juicio



ejecutivo, segun la ley de procedimientos citados. Esto es tan evidente, que no merece mayor demostracion.

3.° *Incompetencia de jurisdiccion.*—Segun el mismo art. 327, tiene tambien lugar contra las ejecuciones esta excepcion, si, con arreglo á las disposiciones del Código de Comercio, no se debiere calificar de acto mercantil el contrato de que proceda el título de la ejecucion. Ampliamente se ha discutido si podria alegarse con fruto que el conocimiento de las demandas contra los bancos de emision, para el pago de sus billetes, corresponde á los Tribunales de la jurisdiccion ordinaria, porque determinando el Código de Comercio, en su art. 571, segun ya se ha indicado, que los pagarés en favor del portador, sin expresion de persona determinada, no producen obligacion civil, ni accion en juicio, declara virtual, pero necesariamente, que no puede merecer la calificacion de mercantil el contrato que tácitamente se celebra entre el banco que emite y el particular que toma los billetes, consistiendo en obligarse el primero á abonar al portador de ellos, á su presentacion, el valor que representen. Y como no puede ménos de nacer simultáneamente y al lado de una obligacion, la accion correlativa para que el derecho adquirido no sea ilusorio, claro es que, no pudiendo ejercitarle en los Tribunales de comercio, porque la ley mercantil no reconoce eficacia en los pagarés al portador, habria de serlo forzosamente en los Tribunales ordinarios.

Sin embargo, á juicio de la Junta, los que así ra-



ciocinan, padecen un gravísimo error, equiparando los billetes emitidos por un banco de emision á los pagarés librados por los particulares en favor del portador, y sin expresion de persona determinada. Si la ley, por consideraciones que no es ahora del momento discutir, ha negado toda eficacia á estos últimos, la ha concedido plena y absolutamente á los primeros. Basta, en su comprobacion, recordar el art. 2.º de la ley de 4 de Mayo de 1849, el 7.º de la de 15 de Diciembre de 1851 y el 9.º de la de 28 de Enero de 1856. Por el primero se dispone que el Banco español de San Fernando (cuya reorganizacion era el objeto de esta ley) tendria la facultad exclusiva de emitir billetes pagaderos al portador y á la vista, en su caja de Madrid y en las que establezca en las provincias. Igual facultad se concedió en el segundo al mismo Banco en la nueva organizacion que entónces se le daba; y la propia facultad se concedió en el tercero al Banco de España, añadiéndose en el art. 13 de sus Estatutos, que estos billetes serian pagaderos en sus cajas de Madrid, en las horas que fijase el Reglamento. Estas disposiciones legislativas, posteriores al Código de Comercio, estableciendo la obligacion que tiene el Banco á satisfacer á su simple presentacion los billetes al portador que emita, los declaró eficaces, modificando esencialmente el art. 571 de dicho Código que les negaba el carácter de obligatorios, y por consiguiente, toda accion en juicio para repetir su importe. Son, pues, hoy efectos de comercio, garantidos por la ley, provenientes de un acto esencialmente mercantil, emitidos por un establecimiento que tiene este

mismo concepto, y exigibles, por lo mismo, ante los Tribunales de Comercio. No creen, por tanto, los que suscriben, que se pueda oponer la incompetencia de jurisdiccion, por corresponder el conocimiento de estas demandas á los Tribunales ordinarios.

Pero ¿podrá sostenerse que son de la competencia de los contencioso-administrativos? Con el mismo ó mayor detenimiento ha sido examinada esta ardua cuestion, pero desgraciadamente no ha podido ser resuelta con la unanimidad que las anteriores.

La mayoría de los letrados que suscriben cree que, habiéndose fundado la demanda del Marqués de Santa Marta en que la falta de pago de los billetes á su presentacion envuelve una infraccion de la ley constitutiva y del Reglamento del Banco arriba ya citado, corresponde el conocimiento de las demandas que por esta razon se interpongan al Consejo de Estado, con arreglo al art. 18 de la ley de 4 de Mayo de 1849, y podrá oponerse tambien este medio de defensa por medio de la declinatoria de jurisdiccion, pero advirtiéndose que este medio debe utilizarse en la segunda instancia, porque con arreglo al art. 3.º del Real decreto de 4 de Julio de 1847, los Jefes políticos (hoy Gobernadores civiles), á quienes exclusivamente está reservada la facultad de suscitar contiendas de incompetencia, no pueden hacerlo en los pleitos de Comercio durante la primera instancia, si bien será conveniente, y áun necesario, dejar indicado desde la primera este medio de defensa para que nunca se entienda consentida la competencia de jurisdiccion del Tribunal de Comercio.



Reasumiendo lo expuesto en contestacion á la segunda pregunta, los medios legales que tiene el Banco de España para defenderse en la demanda del Marqués de Santa Marta, son: *primero*, pedir que se declare nula la ejecucion despachada; *segundo*, utilizar en el término del encargado la excepcion de falsedad de los billetes, si éstos no fueran legítimos; y *tercero*, alegar la incompetencia de jurisdiccion, reservándose el derecho de acudir en su caso y lugar á la autoridad que, segun la ley, puede exclusivamente suscitar la contienda.

Pero quedaria imperfecto y manco nuestro dictámen si nos limitásemos á la cuestion legal, considerada en el Código de Comercio, en los preceptos del derecho comun y en las leyes especiales que constituyen la organizacion y operaciones del Banco de España.

Y al llegar á este punto, deber nuestro es aceptar las gravísimas cuestiones sometidas á nuestro parecer de letrados, en toda su magnitud, sin esquivar dificultad alguna, por grave que aparezca ó sea.

No se resolverá, y decimos esto con la más profunda conviccion; no se resolverá el conflicto actual entre el Banco y los tenedores de sus billetes por ninguna de las disposiciones legales existentes; todavía más, sería anómalo y perfectamente absurdo que así sucediese.

Las leyes mercantiles, y más en particular las que se refieren á la creacion de bancos y establecimientos de crédito, suponen siempre y parten necesariamente de un estado normal de las relaciones civiles y mercantiles de un pueblo. Legislan los poderes públicos

para un orden de hechos y transacciones constante entre los asociados, dejando para leyes, con exactitud denominadas especiales, la resolucion de casos y conflictos transitorios, hijos de circunstancias excepcionales y tambien pasajeras.

Tal acontece, á no dudarlo, con el Banco de España en el período singular y azaroso que atraviesa hoy la plaza de Madrid. Por el art. 9.º de la ley de 28 de Enero de 1856, está autorizado aquel *para emitir una suma de billetes al portador igual al triple de su capital efectivo, teniendo la obligacion de conservar en metálico, en sus cajas, la tercera parte, cuando ménos, del importe de sus billetes.*

¿Cómo, pues, explicar el fenómeno, la irregularidad de que teniendo el Banco en sus cajas, no la tercera parte en metálico, sino más de la mitad del importe de los billetes emitidos, tropieza con reclamaciones continuas para el cambio de la moneda fiduciaria, hasta llegar á la sentencia objeto de esta consulta, y á una ejecucion, como deudor moroso y de mal pago?

Invoca la sala del Tribunal territorial las disposiciones del derecho mercantil y las leyes constitutivas del Banco. Vemos estas mismas leyes, y encontramos al Banco de España en una situacion más próspera, más al alcance de cubrir todas sus obligaciones, que aquella misma que le imponen como deber los fundamentos de su organizacion, sus bases reglamentarias.

Indudablemente existe aquí una contradiccion que apénas se concibe: media entre las leyes constitutivas del Banco y la demanda que ha provocado la



sentencia de la sala primera, tan grande abismo, que nadie acierta á comprender cómo pueden conciliarse el espíritu y la letra de la constitucion del Banco con reclamaciones judiciales, y una ejecucion contra el establecimiento.

Y sin embargo, es fácil, y hasta trivial, averiguar la causa y origen de esta anomalia y extrañeza.

Los legisladores del país han establecido reglas para que el Banco funcione en las circunstancias ordinarias del crédito y de la circulacion. Han creído, y con harta razon, que teniendo el establecimiento una reserva metálica correspondiente á la tercera parte de la moneda fiduciaria emitida, bastaba con mucho á las necesidades del mercado de Madrid y á las exigencias del cambio de billetes en la plaza.

Dirémos más: aún dado el conflicto en que se encuentra el Banco, se ha de convenir que este mismo lamentable suceso confirma las reglas establecidas por los legisladores de casi todos los países para los bancos de emision, á saber: que en tiempos ordinarios la tercera parte de reserva en dinero alcanza á satisfacer los pedidos ordinarios del cambio, cuando están garantidos los intereses por el capital activo del Banco, ya en especies metálicas, ya en valores en cartera.

Porque, debemos consignarlo despues de un detenido exámen de todos los antecedentes y documentos que se refieren á la situacion actual del Banco de España: si no existiesen hechos anormales, hechos extraordinarios, si no concurriesen circunstancias verdaderamente singulares, que perturban en Madrid, y

áun en la España entera, las leyes comunes de la circulación y del crédito, el billete del Banco de España, lejos de acudir á los Tribunales para obtener su cambio por medio de una ejecución, se veria, por el contrario, muy codiciado, como moneda de facilísima circulación y muy cómoda para los cambios y transacciones mercantiles.

Pero ocurre en los mercados de España, y muy particularmente en el de Madrid, una singularísima perturbación, hija de causas muy complicadas, que no entra en nuestro propósito examinar, pero que, á no dudarlo, es el origen de los compromisos que aquejan al Banco de España.

Sucede hoy en nuestro país que ocurren sin cesar grandes exigencias de moneda metálica, que se realizan grandes obras en las provincias, cuyo importe se satisface en especie, siendo así que ántes estas sumas aflúan al tesoro nacional. Sucede también, y esto es más grave, ó mejor dicho, el nudo de la dificultad, y lo que debe preocupar grandemente á los legisladores del país, y al país mismo, que entre los valores emitidos en papel y el metálico circulante existe una desproporción verdaderamente tristísima.

Reconociendo, como se reconoce en estos hechos, una generación necesaria, se llega por fuerza á esta consecuencia económica inevitable: que entre la moneda fiduciaria del Banco y la moneda metálica hay un considerable desequilibrio; que la última se convierte en mercancía, y tiende, con irresistible ponderación, á venderse en los mercados extranjeros.

Esta emigración, por decirlo así, de nuestro di-



nero acuñado, se ha hecho verdaderamente increíble desde que ciertas monedas adquirían, por causas que no es de este momento examinar, una considerable prima fuera de España.

Sólo así se concibe que desde Diciembre de 1863 á Julio de 1864 haya salido de las cajas del Banco la enorme suma de 409.062,800 rs. en especie metálica. Sólo así puede explicarse que al levantar el establecimiento toda restriccion al cambio de billetes, en 21 de Junio de 1864, se elevase la salida de metálico, en veinticuatro dias, á la fabulosa cantidad de 99.934,000 rs.

Hemos dicho, y queremos insistir en ello, que el metálico, pero en determinadas monedas, es incesantemente arrastrado á los mercados extranjeros; mejor dicho, y hablando en los términos de la ciencia, que el dinero se ha convertido en artículo de venta, que se consume, no en España, sino en los mercados de otros países.

Dado este hecho gravísimo, que el Banco no tiene á su alcance medios de corregir ni neutralizar, los resultados eran fatales é indeclinables. La conversion á todo trance de la moneda fiduciaria en moneda metálica constituye una operacion lucrativa, cuyo último término ha de llegar, de no impedirlo con tiempo, al cambio de todos los billetes en dinero, y á la salida de todo el dinero á las plazas del extranjero.

El Banco comprendió entónces que ni la adquisicion de pastas metálicas para convertirlas en dinero, ni la acuñacion de las pastas en monedas que no

excitasen el agio, eran suficientes para evitar el movimiento del metálico que amenazaba tan de cerca la circulacion monetaria de España: un paso más, y la crisis de moneda hubiera sido tan grave, que aparte de las perturbaciones de los mercados y de las transacciones mercantiles, iba á dejar paralizadas las obras, que, ya á cargo del Gobierno, ya por iniciativa de los particulares, son en la actualidad fuente principal de subsistencia para nuestras clases proletarias, y porvenir lisonjero para este país.

Recurrió entónces el Banco, con autorizacion del Gobierno, á limitar el cambio de billetes á lo que prudencialmente demandaban las necesidades y movimiento ordinario de la plaza de Madrid.

Y aquí entra el punto culminante, la parte esencialísima de esta consulta. No ha sido suficiente la determinacion del Banco para cortar el mal, ni en manera alguna podia, ni debia, serlo. Cuando ocurren en un país hechos tan extraordinarios; cuando se alteran y perturban las leyes de la circulacion; cuando el dinero, convertido en mercancía, no representa, no tiene su verdadera significacion, tan sólo el país mismo, el Estado, que lo representa, los poderes públicos, son los que pueden, con medidas legislativas de circunstancia, hacer frente á necesidades y exigencias tambien de circunstancia.

De otra suerte, podia suceder, y ha sucedido, que llegase un estado de cosas tan aflictivo y desventajoso para el Banco, como el que en la actualidad presentamos y forma el asunto importante de esta consulta.

Llevada á los Tribunales ordinarios una cuestion



que encierra en sí problemas tan graves, hechos que afectan tan de cerca, dirémos más, que amenazan dejar exhaustas de monedas nuestras plazas de comercio, aniquilada la importancia de los valores en cartera, paralizadas las obras públicas; los Tribunales, no pudiendo, no debiendo tampoco, tener en cuenta los elementos componentes de cuestion tan magna, han fallado en contra del Banco, porque la legislación del establecimiento, refiriéndose á casos comunes y ordinarios, mejor dicho, no determinando nada sobre un suceso anormal y superior á la prevision humana, dejaba en último término su imperio á las leyes civiles y mercantiles, para establecer como caso singular el valor de las obligaciones que el Banco ha contraído con este ó el otro particular.

Y por eso la sentencia de la sala primera, á despecho de la rectitud é intenciones de los magistrados que la dictaron, presenta, como hemos indicado al examinarla con prolijo análisis, más que los caracteres de un fallo jurídico, el aspecto y la forma de una verdadera ley sobre la materia.

Y una ley, hé aquí la verdad, es lo que puede poner término á este conflicto: únicamente á los poderes públicos les es dado acudir, con medidas supremas legislativas, á esta situacion, tan amenazadora para el crédito y la circulacion en España.

No toca á los letrados que suscriben, ni se atreverian á hacerlo, insinuar tan siquiera la naturaleza ni el alcance de estas medidas.

Sólo sí dirán que habiendo estudiado con tan severa

solicitud la situacion actual del Banco de España; conociendo perfectamente el estado de su capital; enterados de las causas que impiden, mejor dicho, que limitan el cambio diario de sus billetes, tienen la mayor confianza en la publicidad y discusion de todos estos antecedentes, que por fuerza han de tener lugar en los Cuerpos Colegisladores.

Cuando todo el mundo sepa lo que nosotros sabemos hoy, por un estudio concienzudo; cuando sea público el activo del Banco; cuando conozcan los tenedores de billetes que la reserva metálica es muy superior á la que determina el art. 9.º de la ley de 28 de Enero de 1856; cuando, en fin, comprendan todos que el cambio de los billetes, tan hacedero para el Banco, nos conduciría irresistiblemente á un estado desastroso para la plaza de Madrid, y á la ruina de los más graves intereses del país; estamos seguros de que esta cuestion, tan formidable á primera vista, se presentará á los legisladores, y á la nacion misma, de fácil y hasta de óbvia resolucion.

Mas, prescindiendo de esto, lo cierto es, que el estudio detenido, comparativo y escrupuloso que hemos hecho de los datos y antecedentes necesarios, nos ofrece estas tres consecuencias, que debemos consignar como punto de vista general y sintético de nuestra consulta en esta parte :

*Primera.* El Banco de España, disponiendo de su reserva metálica y realizando en corto plazo sus valo-



res en cartera, puede fácilmente cambiar todos sus billetes.

*Segunda.* El cambio de los billetes de Banco daría por resultados inevitables, la emigración de la moneda, grande escasez consiguiente de numerario, una crisis monetaria, el grave conflicto de muchas casas de comercio, la ruina de la plaza de Madrid, y honda perturbación en el crédito é interés de la nación entera.

*Tercera.* Llegadas las cosas á este extremo, no es el Banco, es el Gobierno, son las Cortes con la Corona, los que pueden prevenir, por disposiciones legislativas, el peligro, salvando nuestro crédito y los intereses públicos amenazados, sin dejar olvidado, ántes bien sólidamente garantido, el interés, no ménos respetable y sagrado, de los tenedores de billetes ó moneda fiduciaria del Banco de España.

Estamos seguros, y no queremos pasarlo en silencio, de que si en esta cuestión fuese necesario acudir al desinterés y patriotismo de los españoles, no en vano se apelaría á ellos, tratándose de evitar los temores y desastres de una crisis monetaria.

Hemos contestado, acerca de cada uno de los puntos consultados, lo que, después de un examen prolijo y de una discusión detenida, conceptuamos que es lo más ajustado á los principios del derecho civil y mercantil, á las prescripciones legales y á lo que el interés del crédito y de la circulación reclama; indicando únicamente las razones en que descansan nuestras

opiniones, que emitimos con el recto deseo del acierto, aunque desconfiando de haberle alcanzado.

*Madrid, 10 de Enero de 1866.*

MANUEL CORTINA.

FRANCISCO CUTANDA.

JUAN GONZALEZ ACEVEDO.

LUIS DIAZ PEREZ.

JOSÉ GONZALEZ SERRANO.

RAMON PASARON Y LASTRA.

CIRILO ALVAREZ.

NICOLAS MARÍA RIVERO.

JOSÉ MARÍA FERNANDEZ  
DE LA HOZ.

LAUREANO FIGUEROLA.

PEDRO GOMEZ  
DE LA SERNA.

CAMILO MUÑIZ VEGA.

A. DEL RIVERO CIDRAQUE.

GREGORIO DE MIOTA.

















